

FOREIGN AFFAIRS

LATINOAMÉRICA

VOLUMEN 17 • NÚMERO 1

ENERO-MARZO 2017

Trump y la política migratoria de México

Cita recomendada:

Délano Alonso, Alexandra, (2017) "Trump y la política migratoria de México", *Foreign Affairs Latinoamérica*, Vol. 17: Núm. 1, pp. 35-44. Disponible en: www.fal.itam.mx

Trump y la política migratoria de México

Cómo prepararse (aquí y allá) ante la amenaza antinmigrante

✎ *Alexandra Délano Alonso*

Como nunca antes en la historia reciente de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump puso el tema de México y de los mexicanos en el exterior en el centro de la discusión. Con una campaña basada en un discurso antinmigrante y antimexicano, Trump envalentonó las voces entre algunos sectores en Estados Unidos que históricamente han estado en contra de México y los mexicanos. El candidato republicano movilizó a millones para que votaran por él, con la promesa de construir un muro en la frontera y deportar a millones de migrantes para librar a su país del crimen, la inseguridad y las drogas que presuntamente se originan en el sur. La sorpresa de esta elección no fue el despertar del gigante dormido —el tan esperado voto latino—, sino la fuerza de quienes encontraron un foro abierto para corear sin reservas y a viva voz: “¡Construye el muro, y que lo pague México!”.

En un escenario que ni el más pesimista hubiera imaginado al inicio de las campañas por la candidatura presidencial, el trabajo que ha hecho el gobierno mexicano en los últimos 20 años para cambiar las percepciones negativas sobre los migrantes y sobre México por medio de la diplomacia consular y la política de atención a las comunidades mexicanas en el exterior tuvo un retroceso significativo, mientras que la fuerza de la comunidad latina resultó, nuevamente, insuficiente.

La insistencia en que México pague el muro, y el hecho de que la mayoría de las deportaciones y el fin del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) afectarían a millones de mexicanos (en Estados Unidos y en México), obligan al gobierno mexicano y a su diáspora a replantear sus estrategias y prepararse para los distintos escenarios posibles desde una posición mucho más complicada, porque

ALEXANDRA DÉLANO ALONSO es profesora de Asuntos Globales y codirectora del Instituto Zolberg sobre Migración y Movilidad en The New School en Nueva York. Es autora de *México y su diáspora en Estados Unidos: las políticas de emigración desde 1848*. Sigala en Twitter en @ale_delano.

el discurso de Trump y aquellos a quienes ha dado voz es más agresivo y directo. No obstante, no es una situación nueva para México ni para los mexicanos en el exterior. Durante el gobierno de Barack Obama fueron deportados más de dos millones de mexicanos y muchos más regresaron por cuenta propia en el contexto de la recesión económica de 2008. A su vez, el discurso y las políticas antinmigrantes no son algo desconocido. Desde 1994, con la Propuesta 187 en California, pero sobre todo desde 2005, se han planteado miles de leyes en los ámbitos local, estatal y federal —muchas de ellas basadas en propuestas de individuos que ahora están en el equipo de transición de Trump— que buscan limitar los derechos de miles de migrantes y, más allá de que se aprueben o no, han tenido el efecto de aumentar la discriminación racial. Las lecciones de los últimos 20 años en los que México y la comunidad migrante organizada han respondido activamente a leyes antinmigrantes, discursos xenófobos, detenciones y deportaciones masivas, ofrecen una base sólida para replantear las acciones del gobierno y de los mexicanos (aquí y allá) en este nuevo contexto.

DEPORTACIONES, RETORNO Y (RE)INTEGRACIÓN

Con el resultado de las elecciones del 8 de noviembre de 2016, el gobierno mexicano respondió rápidamente con programas para extender los servicios de protección consular y los horarios de atención en los consulados, y llamó a la comunidad a mantener la calma e informarse. En este momento nadie puede asegurar si Trump llevará a cabo un programa de deportaciones más amplio que el de Obama, pero más allá de la atención consular necesaria, el gobierno y la sociedad mexicana tienen que estar preparados para que regresen millones de personas al país, ya sea de manera forzada o voluntaria, en un plazo corto o largo. La respuesta de México a los más de dos millones de retornados en los últimos 8 años ha sido lenta y limitada, pero deja lecciones que pueden aprovechar de inmediato el gobierno y la sociedad civil, independientemente de lo que haga el gobierno de Trump. Ahora más que nunca, México necesita tomar la iniciativa.

En 2014, 6 años después del inicio de las deportaciones masivas, el gobierno mexicano lanzó el Programa Somos Mexicanos, para “facilitar la reinserción social y económica de las personas repatriadas mexicanas con el fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos”. El programa reconoce la necesidad de coordinar planes y estrategias para prestar apoyo integral a los migrantes retornados, más que solo recibirlos en los centros de repatriación en la frontera y darles un boleto de autobús que los traslade a sus comunidades de origen, lugares que muchos ya no reconocen o donde ya no tienen parientes. Sin embargo, en la práctica aún hay enormes carencias en cuanto al apoyo que requieren los migrantes retornados para reincorporarse a su propio país —como barreras burocráticas para obtener desde identificaciones hasta certificados de competencias laborales, revalidación de estudios o acceso al sistema de salud—. En el caso de miles de niños que nacieron o crecieron en Estados Unidos, hay grandes retos, como el aprendizaje del idioma a la par de la sensibilización de los maestros para apoyar su desempeño escolar en el sistema mexicano.

*Ahora más que nunca,
México necesita tomar
la iniciativa.*

Se han logrado avances importantes, como la eliminación del requisito de apostillar los documentos escolares en los niveles básico y medio superior, pero hace falta un enfoque integral y de largo plazo que abarque las dificultades de los migrantes retornados después del periodo inicial de su regreso, que incluya programas de salud

mental, acceso a estudios de licenciatura y posgrado, talleres educativos e información sobre los servicios básicos y la defensa de sus derechos en México, tal como se les ofrece en los consulados mexicanos en Estados Unidos para apoyar su integración en ese país. Asimismo, se requiere un trabajo profundo para educar e informar a la población en México sobre la

situación de los migrantes. La mayoría de los migrantes retornados, al igual que los migrantes de Centro y Sudamérica y de otras regiones que pasan por el país, enfrentan discriminación y exclusión en México.

Las percepciones negativas sobre los migrantes retornados no son nuevas. En su reciente libro *Voces de la repatriación*, el historiador de El Colegio de San Luis, Fernando Alanís Enciso, documenta cómo desde la repatriación tras la Gran Depresión de 1929 se tachaba a los migrantes de traidores, agringados y pochos. Pero también en esos años se crearon redes de solidaridad y apoyo de la sociedad civil que hoy son mucho más sólidas y sobre las cuales se pueden establecer alianzas más firmes entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las incipientes asociaciones de migrantes retornados (como Otros Dreams en Acción o Dream in Mexico) y el sector privado para atender las necesidades y reconocer las aportaciones de los migrantes retornados a México como ciudadanos bilingües, biculturales y binacionales. La idea no es nueva. Es exactamente lo que ha orientado las acciones de México respecto a los mexicanos en el exterior y es una oportunidad para adoptar una política coherente dentro del país, adaptando las lecciones aprendidas en el ámbito consular al trabajo de la red de delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores —como ya se ha propuesto, aunque no se han visto resultados en la práctica—, en colaboración con Oficinas de Atención al Migrante y organizaciones locales de la sociedad civil, como los albergues, para hacer realidad la promesa de la protección de los derechos de los migrantes a lo largo de todo el proceso migratorio: emigración, tránsito, asentamiento y retorno.

ACCESO A DERECHOS SIN FRONTERAS

Desde la década de 1990, y sobre todo en los últimos 15 años, México ha invertido una enorme cantidad de recursos materiales y humanos en el desarrollo de programas de salud, educación, bancarización y participación ciudadana dentro de los consulados en Estados Unidos, para responder a los enormes retos que enfrenta la población mexicana (y latina) en ese país y promover su integración. En comparación con otros grupos étnicos, la población de origen mexicano en Estados Unidos (36 millones de personas, con 11 millones nacidas en México) se caracteriza por tener bajos niveles

educativos y alta deserción escolar, lo cual limita sus oportunidades de trabajo y de movilidad social. Las condiciones en las que viven y trabajan millones de migrantes mexicanos afectan significativamente sus condiciones de salud, lo cual se refleja en los elevados índices de obesidad y diabetes en la comunidad, entre otros padecimientos. Hay millones de mexicanos sin seguro médico, lo cual implica que no tienen acceso a salud preventiva y tienen que recurrir a servicios de emergencia que muchos no pueden pagar. La desinformación, el miedo y las barreras de lenguaje también limitan su acceso a instituciones bancarias en Estados Unidos, lo cual los deja en una posición vulnerable frente a asaltos y, sobre todo, impide que tengan créditos y cuentas de ahorro que les permitan planear hacia el futuro. Además, en la población de migrantes mexicanos que residen legalmente en Estados Unidos (cerca de 5 millones) hay 2.7 millones que cumplen los requisitos para naturalizarse y ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos estadounidenses, incluyendo el voto, pero no lo han hecho. En comparación con otros grupos, los mexicanos tienen los niveles más bajos de naturalización.

Frente a esta realidad, el gobierno mexicano, las organizaciones de migrantes, grupos de la sociedad civil y oficinas de gobierno de Estados Unidos colaboran para ofrecer programas de educación para adultos, desde alfabetización hasta bachillerato y clases de inglés por medio de las llamadas Plazas Comunitarias que operan en escuelas públicas y centros comunitarios con materiales y programas de la Secretaría de Educación Pública. Para satisfacer las necesidades de jóvenes mexicanos que se han formado desde niños en Estados Unidos, como los *dreamers*, pero no consiguen financiamiento para ir a la universidad, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) ofrece becas. Además de los recursos (escasos) que ofrece el gobierno de México, estos programas de becas se han ampliado con el apoyo de empresarios mexicanos y fundaciones. Este tipo de apoyos serán aún más relevantes ante la posible cancelación del programa DACA e implicará importantes retos para que los jóvenes puedan tener acceso a empleos o financiamiento para pagar sus estudios.

En cada uno de los cincuenta consulados en Estados Unidos hay Ventanillas de Salud que ofrecen sus servicios dentro de las salas de espera de pasaportes y matrículas consulares. Estos servicios consisten en pláticas informativas, pruebas gratuitas de glucosa, presión arterial o VIH, vacunas, referencias a clínicas u hospitales e información sobre seguros médicos accesibles. Para llegar a más personas, fuera de los consulados se organizan ferias de salud en plazas públicas, iglesias y universidades en colaboración con clínicas, hospitales, farmacias y consulados de otros países. El modelo de las Ventanillas de Salud ha servido para emprender programas similares de educación financiera y derechos laborales dentro de los consulados. Ahí se ofrecen talleres para conocer el sistema bancario y apoyo para abrir una cuenta o pagar impuestos. También se invita a autoridades de cada ciudad para que expliquen cómo se puede interponer una demanda a un patrón o como tomar cursos de certificación laboral, independientemente del estatus migratorio del empleado. El hecho de que el consulado invite a representantes de estas instituciones privadas o públicas a sus oficinas crea un ambiente de confianza que

facilita el acercamiento de la comunidad a sus servicios. Aunque los programas tienen un alcance limitado, llenan una brecha fundamental para que la población de origen mexicano pueda ejercer y defender sus derechos en ese país, sobre todo en contextos como el actual, en el que impera el temor de acercarse a instituciones estadounidenses y se limitan aún más los recursos para atender las necesidades de comunidades vulnerables.

Además de la atención consular y la protección preventiva, históricamente México también ha fomentado las organizaciones comunitarias y la participación cívica para contribuir al fortalecimiento de las comunidades. Los consulados y el IME organizan talleres y actividades de formación de redes entre miembros de la comunidad, tanto en cada circunscripción consular como a nivel regional y nacional. De estas acciones han surgido iniciativas importantes, como la Coalición de Mexicanos por una Reforma Migratoria o la Alianza Mexicana y Americana Antidifamación (AMADA), aunque no han logrado consolidarse y la participación política de los mexicanos dentro de Estados Unidos es limitada. La iniciativa más reciente del gobierno mexicano, destinada a promover la naturalización entre las personas elegibles, es un paso importante para que los mexicanos ejerzan plenamente sus derechos en Estados Unidos, entre otros, el derecho a votar y a ser votados.

Además de ayudar a millones de mexicanos a quienes se les dificultaría obtener esta información o estos apoyos de otra manera, con dichos programas el gobierno mexicano también está invirtiendo en mejorar la imagen de sus ciudadanos y de México entre la opinión pública estadounidense. En el fondo del discurso antimexicano de Trump y de otros intelectuales o individuos que han sostenido argumentos similares desde hace muchos años, está el desconocimiento y el miedo de que los inmigrantes no quieran o no puedan integrarse a la sociedad estadounidense. Así, argumentan que no hablan inglés, que representan lo peor de su cultura, que son una amenaza a la seguridad o que no creen en los valores democráticos. La estrategia política mexicana es de bajo perfil, y rara vez se discute dentro o fuera de México. Esa discreción ha servido para avanzar y consolidar los programas sin que las críticas de los grupos más conservadores sean obstáculo para la amplia colaboración que ya existe entre gobiernos, sociedad civil, organizaciones de migrantes y empresas, pero también ha evitado una discusión de fondo sobre los objetivos y logros de estos programas, así como su coherencia con relación a las políticas de atención al migrante en México. Es probable que durante el gobierno de Trump México repliegue aún más la difusión de estas acciones como parte de su política exterior, para evitar acusaciones de intervencionismo o de que el gobierno fomenta la doble lealtad de los mexicoestadounidenses. Sin embargo, estos programas, que forman parte de los servicios de atención consular y protección preventiva, serán cada vez más importantes en un contexto en el que se intensifica el miedo de los migrantes a salir a las calles o a acercarse a instituciones o autoridades, para no ponerse en riesgo o afectar a sus familiares con estatus de indocumentados. También son una guía para orientar las acciones que protejan los derechos de los migrantes retornados, en tránsito o asentados en México.

MÁS ALLÁ DEL MURO

La insistencia de Trump de que a México (el principal país de origen de los más de 41 millones de migrantes que viven en ese país) le corresponde el pago de la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, en lugar de que orille al gobierno dar una respuesta defensiva, puede ser una oportunidad para replantear el debate sobre la distribución de costos y beneficios de la migración y sobre el principio de responsabilidad compartida, que está en el centro de la política de México. La lógica de que el país de origen debe asumir parte de los costos que implica la residencia de sus ciudadanos en otro país puede ser el inicio de un planteamiento sustantivo sobre las causas estructurales de la migración (de ambos lados de la frontera), pero es necesario llevarlo más allá del control de los flujos migratorios. Por ejemplo, si una de las preocupaciones de la opinión pública estadounidense es que los inmigrantes hagan uso de servicios públicos como educación y salud, ¿es suficiente lo que ya hace México para absorber parte de estos costos? ¿Puede hacer más? Por otro lado, si el país de origen invirtió en la educación y salud de los ciudadanos que ahora contribuyen al desarrollo económico de Estados Unidos y llenan brechas importantes en el mercado laboral, ¿debe aplicarse un impuesto que se devuelva a México, como lo ha sugerido el economista Jagdish Bhagwati y como, de hecho, lo hace Estados Unidos con sus “expatriados”? O, si se consideran estas contribuciones, ¿podría crearse un fondo bilateral para el desarrollo en las comunidades expulsoras de migrantes en México, como lo propuso el académico Robert Pastor en el contexto de la integración regional en Norteamérica?

Evidentemente, no basta con decirle a Trump (ni en público ni en privado) que el gobierno de México no va a pagar el muro. El muro, además, ya existe y se extiende por las principales zonas donde no hay una frontera natural, como el desierto o las montañas. Esta política de control (que no incluye políticas paralelas para canalizar los flujos migratorios de manera ordenada y segura) ha orillado a miles de migrantes a seguir rutas más peligrosas en las que han perdido la vida cerca de 10 000 mexicanos desde 1993, y ha favorecido el crecimiento de redes de tráfico de personas y extorsión de migrantes. Como se demostró en agosto de 2016 con la desafortunada invitación del gobierno de Enrique Peña Nieto a Trump para que visitara México, jugar el juego de quién va a pagar lleva a un debate inútil en el que ni siquiera se descarta la premisa de que el muro se vaya a construir.

Además de los argumentos humanitarios o económicos en contra del muro, también se requiere una reflexión sobre el discurso y las acciones convenientes para que se logre el apoyo a una política migratoria que reconozca a los migrantes como parte de sus comunidades y que eduque a la opinión pública de los dos países acerca de las causas de la emigración y sus condiciones históricas, políticas, sociales, culturales y económicas de ambos lados de la frontera. Los *dreamers* son un ejemplo de que los

El debate sustantivo detrás de los desplantes de Trump es sobre la distribución de los costos y beneficios de la migración.

testimonios y la movilización a partir de nuevas premisas, como el derecho a la educación, pueden lograr estos cambios tanto de percepciones como de políticas. El programa DACA es prueba de ello.

Las acciones ejecutivas para apoyar a los *dreamers* han traído enormes beneficios a estos jóvenes y sus familias, pero son insuficientes, en primer lugar, porque Trump puede suspenderlas en cualquier momento, dado que solo son un decreto presidencial. Y en segundo lugar, porque cubren únicamente a una pequeña proporción de la población inmigrante (hasta el momento ha beneficiado a cerca de 700 000 jóvenes, de una población total de 11 millones de indocumentados, de los cuales entre 5 y 6 millones son mexicanos). En junio de 2016, cuando la Suprema Corte emitió su fallo 4-4 sobre el programa DACA ampliado y el Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA), el cual implicó que estos programas se bloquearan, un grupo de *dreamers* que estaban en México amparados en el recurso de *advance parole* explicaban que el fallo era una decepción, pero que no resultaba del todo negativo, pues las organizaciones de inmigrantes y sus aliados podrían dirigir la atención a medidas permanentes, como una reforma migratoria integral. Ahora más que nunca, la organización comunitaria y las alianzas entre generaciones de líderes migrantes será fundamental, tanto para ofrecer protección y servicios, como para promover la movilización en contra de medidas restrictivas y a favor de leyes que beneficien a los jóvenes indocumentados y a sus familias.

Durante el periodo electoral, la fuerza de la comunidad migrante organizada no se hizo suficientemente patente ni en las calles ni el día de las elecciones. Un migrante mexicano, director de una organización comunitaria de Los Ángeles, me dijo hace unas semanas: “estamos peor que antes, enfrentamos un escenario peor que cuando millones salimos a las calles en 2006 para protestar en contra de la Ley Sensenbrenner y a favor de una reforma migratoria, y hoy no veo que la comunidad responda al enorme peligro que representa Trump”. En gran parte —decía—, la debilidad de la respuesta de los inmigrantes, en particular los mexicanos, tiene que ver con la división existente entre los líderes, que ha limitado su capacidad para organizar coaliciones de alcance nacional. A pesar de estos enormes retos, el desarrollo de grupos como la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes demuestra la madurez que han ido adquiriendo las organizaciones de migrantes mexicanos y el potencial que tienen sus acciones para defender sus derechos tanto en relación con México como con Estados Unidos.

En las últimas décadas el gobierno mexicano se ha esforzado por acercarse a líderes y organizaciones de migrantes en Estados Unidos, y les ha ofrecido un valioso apoyo en la forma de recursos, espacio y servicios. Además, ha tendido redes entre ellos y fomentado sus vínculos con otras organizaciones que se han convertido en sus aliados dentro de Estados Unidos. El IME se creó justamente con el objetivo de reforzar estos liderazgos e integrar las voces de los mexicanos en el exterior contra el desarrollo de las políticas que los afectan. Sin embargo, en los últimos años, el IME ha limitado estos mecanismos, como en el caso del Consejo Consultivo. Estos espacios,

aunque imperfectos, han sido instrumentos para dar voz a los migrantes, fomentar el diálogo entre ellos, integrar sus recomendaciones en la concepción de las políticas del gobierno mexicano y avanzar hacia nuevos esquemas de rendición de cuentas del gobierno frente a su población en el exterior. Para revisar la política migratoria de México y enfrentar los retos que presenten las políticas de Trump, es fundamental que el gobierno sume a los migrantes al diseño y la puesta en marcha de sus estrategias, además de que se les cree espacios autónomos y redes desde las cuales puedan surgir nuevas alianzas entre distintos sectores de la comunidad y entre diferentes generaciones de líderes y activistas en todo el país.

UNA REFORMA POSIBLE

Si bien la postura actual consiste en prepararse para el peor escenario, por lo que implicarían las deportaciones masivas y la cancelación del DACA, también es necesario que el gobierno y la comunidad migrante organizada conciben estrategias para la posibilidad de que se produzca una reforma migratoria o se aprueben leyes más acotadas, como la Ley de fomento para el desarrollo, ayuda y educación para menores extranjeros (Dream Act). Con el control de ambas cámaras en el Congreso, es probable que el gobierno de Trump tenga una gran libertad para promulgar las leyes que proponga. El último punto de la plataforma de Trump sobre migración incluye la propuesta de reformar el sistema migratorio “para beneficio de Estados Unidos y sus trabajadores”. México y sus aliados (como las asociaciones nacionales de latinos, cámaras de comercio, sindicatos, organizaciones de migrantes, empresarios y las representaciones de otros países latinoamericanos) tienen que alistar una estrategia de cabildeo con sus simpatizantes republicanos y demócratas en el Congreso, para que esa reforma incluya posibilidades de regularización del estatus y nuevas categorías de visas de trabajo y reunificación familiar que reflejen la realidad de los flujos migratorios entre ambos países. Además, tendrán que reforzar el trabajo consular para apoyar a los migrantes por medio de talleres, abogados y documentación en caso de que se apruebe alguna ley, como se hizo con el programa DACA.

Los consulados también tendrán que multiplicar sus esfuerzos en el ámbito estatal y municipal por medio de alianzas multisectoriales que apoyen políticas y programas que protejan y amplíen los derechos de los migrantes indocumentados y residentes permanentes, y establezcan alianzas para rechazar leyes antinmigrantes. Son notables los logros que han tenido en los últimos años las coaliciones entre organizaciones de migrantes, grupos de la sociedad civil, medios de comunicación, grupos de consulados latinoamericanos y miembros del sector privado para presionar a favor o en contra de ciertas leyes o programas utilizando recursos legales como los *amicus curiae* (amigos de la corte) o la movilización de grupos de empresarios, como Cien Amigos en California, que ofrecen becas a estudiantes mexicanos. Los resultados de estas estrategias son lecciones importantes para lo que se avecina, pero requerirán una mayor inversión de recursos y alianzas entre el gobierno de México y las comunidades mexicanas en el exterior en todos los

sectores (organizaciones de migrantes, empresarios, profesionistas, académicos, políticos, estudiantes, artistas y figuras públicas).

MIRAR ADEENTRO

Finalmente, la idea de que México envía migrantes “indeseables”, criminales y drogas a Estados Unidos está vinculada con la violencia y el crimen organizado en México, la corrupción que impera entre las élites políticas y la debilidad de las instituciones de justicia. El gobierno mexicano no puede promover una imagen positiva de su país sin asumir las consecuencias que ha tenido la guerra contra el narcotráfico, con los miles de muertos y desaparecidos que ha generado, el desplazamiento interno y el aumento significativo de las peticiones de asilo de mexicanos en Canadá y Estados Unidos. Esta imagen de México, que aunque no es completa define indudablemente el contexto actual y la forma en que se ve al país dentro y fuera, está presente en el discurso que movilizó a millones de estadounidenses a votar por Trump: México y los mexicanos se asocian con imágenes de violencia, criminalidad, drogas y una cultura de ilegalidad. Antes que invertir en campañas de relaciones públicas para promover el turismo o la idea de “Mover a México”, el gobierno mexicano podría dedicar recursos humanos y materiales a una estrategia para colaborar con el gobierno de Trump en un tema en el que coinciden las dos agendas: el consumo de drogas en Estados Unidos. La prioridad que Trump le ha dado al tema puede ser una oportunidad para integrarlo a la agenda nacional y bilateral con un enfoque de salud pública en el que se reconozcan las condiciones de la demanda y la oferta, así como el tráfico de armas de Estados Unidos a México, que alimenta al crimen organizado.

El discurso de Trump, por más que despierte reacciones apasionadas dentro de México, en ocasiones envueltas en la bandera nacionalista, nos obliga a mirar adentro y asumir una responsabilidad por las causas de la emigración, la estrategia fallida de la guerra contra el narcotráfico, la desigualdad y la violencia que trascienden nuestras fronteras. La preocupación sobre las posibles deportaciones —que son ya una realidad en nuestro país— debe traducirse en una política integral que apoye el retorno de migrantes y abra las puertas a nuestros propios ciudadanos para que puedan regresar a su país, en lugar de que la situación se trate como un problema surgido de una desafortunada política estadounidense, ante la cual se debe reaccionar.

Para los mexicanos dentro y fuera de México, el reto de los siguientes 4 años no es solo responder a lo que pueda hacer el gobierno de Trump, sino vigilar que el gobierno mexicano no se cubra con el manto de la política de no intervención que justifique una política migratoria pasiva o que ponga los intereses económicos y la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por encima del tema migratorio (como lo ha hecho antes). Es necesario que el gobierno mexicano, a partir de la colaboración estrecha con las comunidades de mexicanos en el exterior, las organizaciones de la sociedad civil en el interior y sus aliados en los ámbitos local, estatal y federal en Estados Unidos y en México, innove y responda con discursos y acciones que atiendan las necesidades de los migrantes y reflejen sus demandas, aquí y allá.

Además de la respuesta del gobierno mexicano a la retórica de Trump, también nos corresponde a todos los mexicanos, en México y en el mundo, revisar nuestros propios estereotipos sobre los migrantes y las formas en las que discriminamos, directa o indirectamente. Nos toca preguntarnos cómo podemos expresar nuestra solidaridad y ofrecer apoyo a quienes ponen en riesgo su vida en las fronteras sur y norte del país; a los que luchan a favor de los derechos de los migrantes en albergues, en las calles, en organizaciones comunitarias, en fundaciones, en escuelas y universidades; a quienes sufren abusos de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, de las autoridades mexicanas o del crimen organizado; a aquellos no pueden ejercer plenamente sus derechos porque les falta un documento; a quienes que no tienen más opción que dejar a sus hijos y a su familia con la esperanza de darles algo mejor al cruzar una frontera. Conformarnos con decir que Trump y quienes votaron por él son racistas o ignorantes no es suficiente. Si algo positivo puede salir de este panorama desolador es la movilización de los mexicanos, aquí y allá, para exigirle a nuestros gobiernos y a nuestras sociedades respuestas y acciones que asuman una responsabilidad compartida frente a la migración —en todas sus facetas: emigración, inmigración, tránsito y retorno— como un asunto de derechos humanos y justicia social. 🌐